El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el *habeas corpus* colectivo sobre condiciones de detención en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires¹

Introducción.....	1
Breve historia del <i>habeas corpus</i> colectivo.....	1
El fallo de la Corte Suprema.....	4
Síntesis de las medidas resueltas por la Corte en el fallo.....	9
Cronología del Habeas Corpus colectivo.....	9

Introducción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió favorablemente el *habeas corpus* colectivo sobre condiciones de detención en comisarías bonaerenses que el CELS había presentado en 2001 ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. En el fallo del 3 de mayo de 2005, la Corte declaró que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, interpretándolas como los estándares básicos a los que debe adecuarse toda detención. En su resolución el máximo tribunal consideró que la legislación en materia de prisión preventiva y excarcelaciones que rige en la provincia no se ajusta a principios constitucionales e internacionales.

El fallo va más allá del establecimiento de estándares básicos de las condiciones de detención y del pronunciamiento acerca del uso abusivo de la prisión preventiva, ya que avanza sobre cuestiones de igual relevancia como el acceso a la justicia en casos de incidencia colectiva; la articulación de instancias federales y provinciales en temas de derechos humanos; la aplicación de estándares internacionales en el ámbito interno y el margen de control judicial de políticas públicas, cuando estas afectan el ejercicio de derechos.

Breve historia del *habeas corpus* colectivo

Sobrepoblación y condiciones degradantes de detención en la provincia de Buenos Aires

Los datos de sobrepoblación y las condiciones degradantes de detención en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires eran alarmantes en 2001 y siguen constatándose en 2005. Al momento de la interposición de la acción de *habeas corpus* ante el Tribunal de Casación, en noviembre de 2001, había 23.264 personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires. Hoy, cuatro años más tarde, los privados de libertad en cárceles y comisarías son 31.034, es decir, 33% más que en 2001.

La capacidad de las comisarías y otras dependencias policiales, en donde estaban detenidas 6.364 personas era, en 2001 según datos oficiales, sólo de 3.178. Esta situación era aún más grave en las seccionales del conurbano, donde había 5.080 detenidos en celdas con capacidad sólo para 2.068 plazas². Aunque, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, se han construido 6.603 plazas penitenciarias desde entonces, a fin de trasladar allí a las personas detenidas en comisarías, al 13 de abril de 2005, 5951 personas se encontraban alojadas en dependencias policiales por motivos penales.

Las condiciones degradantes de detención, constatadas en 2001, se mantienen hasta la actualidad. Los calabozos de las comisarías permanecen en un estado deplorable de conservación

¹ Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Verbitsky, Horacio (representante del Centro de Estudios Legales y Sociales) s/ Habeas Corpus”.

² Datos proporcionados en su momento por el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal provincial, Mario Coriolano.

e higiene; por lo general sin ventilación ni luz natural. La humedad, el calor y el frío –según la estación del año– resultan agobiantes. No cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda actividad que desarrollen los internos (comer, dormir, etc.) debe llevarse a cabo en el piso. Los sanitarios no son suficientes para todos y en muchos casos se encuentran en los mismos espacios donde los detenidos duermen. No se garantiza una alimentación adecuada. Es alto el riesgo de propagación de enfermedades infecto–contagiosas y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es muy significativo. Según los registros oficiales, en el año 2003 perdieron allí la vida por causas violentas 27 personas, en el 2004 fueron 63 y sólo en los dos primeros meses de 2005 las personas muertas por causa de la violencia suman 29.

Presentación del *habeas corpus* ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires

A partir de la constante violación de derechos a las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2001 el CELS –con el apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos y foros de seguridad de la provincia de Buenos Aires³– presentó una acción de *habeas corpus* colectivo ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia. En la presentación, se solicitaba al tribunal que se pronunciara expresamente acerca de la constitucionalidad de las condiciones de detención en la provincia, que tomara las medidas necesarias para reparar la situación y estableciera mecanismos que evitaran que el problema se reiterara en el tiempo.

El CELS decidió presentar el *habeas corpus* directamente ante el Tribunal de Casación de la provincia porque, según el análisis de la propia jurisprudencia de ese tribunal, era competente para intervenir en una acción de *habeas corpus* que revestía gravedad institucional. En este caso, este supuesto estaba presente a partir de que existía una grosera lesión por parte del Estado provincial de derechos constitucionales esenciales de un colectivo de personas que se encontraban bajo su cuidado. Esta situación vejatoria excede el mero interés de las personas privadas de libertad, afectando de modo directo al de toda la comunidad.

La decisión de presentar una acción de carácter colectivo, en representación de todas las personas detenidas en comisarías, se basó en el análisis de que este era el remedio procesal apto para solucionar la situación denunciada, ya que el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podía incluso perjudicar a los miembros del colectivo. Los remedios parciales que se desprenden de responder caso por caso, no llevan a una solución integral del problema de las condiciones en que están alojadas las personas privadas de libertad en toda la provincia. Los traslados a otras dependencias de las personas que presentan acciones de *habeas corpus* individuales, sólo mejora provisoriamente las condiciones de detención en algunos establecimientos para agravarlas en otros.

Las respuestas de los tribunales máximos de la provincia de Buenos Aires

El 6 de diciembre de 2001 los jueces Ricardo Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires rechazaron la acción colectiva y determinaron que “*el habeas corpus no autoriza, en principio, a sustituir a los jueces propios de la causa en decisiones*

³ Adhirieron expresamente a los términos de la acción presentándose como denunciadores de los hechos, David Baigún –presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)–; Marcos Salt –profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas penitenciarios–, Fabián Salvioli –director de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata–; Emilio García Méndez –abogado, especialista en temas de infancia–; M. Inés Franco –presidente del Foro Vecinal de Seguridad Sección 8º de La Plata–; Sergio Martínez Pintos y Néstor Bernava –integrantes del Foro Vecinal de Seguridad Sección 4º de La Plata–; Juan Miguel Scatolini –presidente de Interforos, de La Plata–; María E. Galíndez –presidente del Foro Vecinal de Seguridad Sección 2º, de La Plata– y Livio Roncarolo –presidente del Foro Vecinal de Seguridad Sección 7º de La Plata.

que les incumben” y que “la reparación de las agravaciones en las condiciones de detención denunciadas en la presentación deben encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales”. Con estos argumentos, el tribunal se declaró incompetente y remitió la causa a cada uno de los jueces a cuya disposición se encontraban los detenidos.

El CELS impugnó este fallo y la causa pasó al estudio de la Suprema Corte provincial. Este tribunal, por mayoría, declaró inadmisibile el recurso⁴, al sostener que no estaba habilitado para intervenir en este caso, porque la resolución de Casación no ponía fin a la acción presentada por el CELS, ya que le daba intervención a los jueces que Casación consideraba competentes. El CELS presentó, entonces, un recurso extraordinario federal ante la corte provincial, solicitando la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante una nueva negativa de la corte provincial, la acción fue presentada directamente ante la corte federal, solicitándole que deje sin efecto las resoluciones de las dos máximas instancias judiciales de la provincia.

El habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El 14 de junio de 2002 el CELS presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que en septiembre de 2003 resolvió pedir un dictamen a la Procuración General de la Nación. En febrero de 2004 el entonces Procurador General Nicolás Becerra emitió un dictamen avalando la acción colectiva y consideró que “el CELS se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires”. Preciso que reconocer al CELS la legitimación para representar a los individuos de un colectivo “pero ordenar que el ejercicio de esa representación tenga lugar de manera individual y separada ante cada uno de los jueces a cuya disposición se hallan detenidas (las personas), equivale a desvirtuar la previsión constitucional de una acción colectiva”.

Se presentaron ante la Corte como *amicus curiae* las organizaciones internacionales Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Human Rights Watch y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y las argentinas Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Clínica Jurídica de Interés Público, Asociación Civil El Ágora, Asociación Civil Casa del Liberado, Asociación Civil Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal).

En octubre de 2004 la Corte Suprema resolvió convocar a una audiencia pública al CELS y al gobernador de la provincia de Buenos Aires a fin de tener mayores elementos al momento de tomar su resolución. El 1° de diciembre de 2004, se realizó la primera audiencia pública ante la Corte –la primera en la historia por un caso de derechos humanos⁵.

El CELS solicitó a la Corte que establezca las condiciones mínimas impuestas por la ley al Estado en materia de alojamiento de personas detenidas, que declare que la omisión estatal de adecuar su política penitenciaria a estos estándares constituye una violación del derecho en cuestión y emplace entonces al Estado a realizar la conducta debida. El CELS también destacó la importancia de que la Corte se reservara el control de la ejecución de las medidas encomendadas a la provincia para reestablecer el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad, lo que implicaría habilitar facultades de supervisión como la prevista en el art. 16 *in fine* de la ley 48. Dicha norma, tal como ha sido reconocido por la mejor doctrina, habilita a la Corte a “retener para sí la jurisdicción”⁶ con el objeto de controlar la ejecución de lo que resuelve⁷.

⁴ La mayoría estuvo integrada por los jueces Juan Carlos Hitters, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Juan Manuel Salas y Alberto Obdulio Pisano, mientras que el juez Héctor Negri votó en disidencia.

⁵ Los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, y Raúl Eugenio Zaffaroni escucharon a los representantes del CELS, de Human Rights Watch y del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

⁶ Morello, Augusto, “El recurso extraordinario”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, p. 368.

⁷ Sagüés, Néstor, ob. cit. p. 561.

En la audiencia el CELS destacó que la gravedad de las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires no es el producto del mero sobrepaso de la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario provincial, sino que las tasas de crecimiento de personas privadas de su libertad se debe a la práctica generalizada de la detención preventiva. Esta correlación se vuelve evidente a partir de las leyes provinciales de 2001 que restringieron el régimen de excarcelaciones y las salidas anticipadas, agravando las condiciones en que viven las personas privadas de libertad en la provincia. A partir de esta descripción, el CELS planteó que es inútil esperar que la construcción de nuevas unidades penitenciarias sea suficiente para garantizar los derechos de la población privada de libertad.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció la gravedad de la situación, señaló la responsabilidad de los jueces en la ejecución de las penas, presentó un ambicioso plan de construcción de cárceles, al mismo tiempo que reconoció que de mantenerse las actuales tasas de encarcelamiento la cantidad de plazas a construir no alcanzaría para alojar a las personas privadas de su libertad y anunció el fortalecimiento del patronato de liberados. Por último, luego de reconocer que el 75% de los presos no tienen condena, anticipó que impulsaría la modificación del código procesal penal para acelerar los plazos judiciales.

La Corte convocó a una segunda audiencia pública⁸ para el 14 de abril de 2005 al CELS y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que la provincia informe y detalle los avances en la ejecución de las propuestas que había presentado en la primera audiencia. Por todo ello, el CELS consideró que resultaba impostergable una decisión de la Corte sobre el *habeas corpus* colectivo y que esta decisión contribuiría a generar un marco institucional más claro para la definición de las políticas públicas en la materia.

El fallo de la Corte Suprema

La decisión en mayoría de los ministros Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda

- Establecimiento de estándares mínimos en materia de condiciones de detención

El CELS había planteado en la acción colectiva que resultaba indispensable definir qué características debe tener un lugar de encierro para que el encarcelamiento de una persona allí pueda considerarse “digno”, en los términos que requiere la normativa internacional y constitucional. La necesidad de contar con estándares únicos y precisos sobre condiciones de detención se torna una exigencia ineludible para la determinación correcta de un cupo penitenciario, además de facilitar la apreciación judicial para el control del cumplimiento de dicho estándar y evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en el análisis de casos individuales.

En respuesta a ello, la Corte estableció las características mínimas que debe tener un lugar de encierro para que sea compatible con lo que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En tal sentido, declaró que “las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención”.

Señaló asimismo que “el art. 18 de la Constitución Nacional al prescribir que `las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice`, reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que

⁸ En esta oportunidad estuvieron presentes los ministros Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Enrique Petracchi

garantice su cumplimiento.” (...) Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas –si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal– se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado en la Provincia de Buenos Aires.” (...)

La Corte agregó que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarias o establecimientos policiales, configuraba una flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas y muy probablemente innegables casos de trato cruel, inhumano o degradante.

El tribunal señaló que cuando el Estado se encuentra en presencia de personas menores de edad privadas de libertad, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona detenida, una obligación adicional establecida en el art. 19 de la Convención Americana. Debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño, particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad.

- El acceso a la justicia en defensa de derechos de incidencia colectiva

La resolución de la Corte Suprema reconoce el derecho del CELS a accionar en forma colectiva en defensa de los intereses de las personas detenidas y alojadas en cárceles y comisarias de la provincia de Buenos Aires, basándose en el segundo párrafo del art. 43, de la Constitución Nacional.

El CELS había planteado que la acción colectiva resultaba el remedio procesal apto para solucionar la situación denunciada, ya que el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podía incluso perjudicar a los miembros del colectivo.

La Corte admite la posibilidad de accionar de manera colectiva mediante el *habeas corpus*, al señalar que “pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el *habeas corpus* como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla. (...)

Que debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad”.

- Control de constitucionalidad de políticas públicas

La resolución de la Corte establece que ese máximo tribunal tiene competencia para ejercer un control de constitucionalidad sobre las políticas implementadas por los poderes políticos en la medida que afecten el ejercicio de derechos. En este sentido, la Corte aclaró que no le correspondía evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, cuestión claramente no judicializable. Pero destacó que cuando una política es lesiva de derechos, al Poder Judicial le corresponde garantizar la eficacia de esos derechos y evitar su vulneración.

En este sentido, señaló: “Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese

marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad.

No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas.”

La Corte reconoció que “las políticas públicas eficaces requieren de discusión y consenso”. Por tal motivo, dispuso el establecimiento de un ámbito de discusión amplio, referido al cumplimiento de las ordenes del tribunal, que “otorgue continuidad al dialogo ya iniciado con el propósito de lograr el mejoramiento de las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires”.

Por ello la Corte encomendó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que organice la convocatoria a una Mesa de Diálogo de la que deberán participar el CELS, las organizaciones presentadas como *amicus curiae*, y representantes del Estado provincial, y otras organizaciones de la sociedad civil, con el fin de generar un ámbito de discusión facilitada que permita arribar a soluciones consensuadas y sustentables.

- El sistema federal como garante último de los Derechos Humanos

El fallo aborda la cuestión relativa al rol que le compete al Estado Federal como garante del respeto de los Derechos Humanos en cada provincia y la obligación que tienen estas de conformar su legislación procesal penal y penitenciaria a las normas federales en la materia.

La Corte señaló que el principio federal que adopta nuestra Constitución Nacional no tiene el mismo origen histórico que el norteamericano “pues procede de un régimen de descentralización administrativa que regía en la colonia, la distribución de competencia legislativa no es idéntica y las provincias delegan en el Estado Federal materias que se reservan en la Constitución de los Estados Unidos. En 1853 y en especial en la fuente norteamericana tomada con preferencia, no se conocían modelos constitucionales de facultades concurrentes en forma de leyes marco, como sucede contemporáneamente.”

Sostuvo que si bien no cabe duda de que los códigos procesales son materia de legislación provincial, la existencia de disposiciones procesales en el Código Penal y la facultad del Congreso Nacional para dictar las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados, parecen indicar que el Estado Federal ejerce cierto grado de legislación y orientación en materia procesal, con el fin de lograr un mínimo equilibrio legislativo que garantice un estándar de igualdad ante la ley.

En tal sentido agregó que “cualquiera sea el sistema procesal de una provincia y sin desmedro de reconocer su amplia autonomía legislativa en la materia, lo cierto es que si bien no puede llevarse la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el principio federal cancele por completo el derecho a la igualdad ante la ley, pues un principio constitucional no puede borrar o eliminar otro de igual jerarquía. Una asimetría total en cuanto a la legislación procesal penal destruiría la necesaria unidad en materia penal que se mantiene en todo el territorio en virtud de un único Código Penal”.

Respecto a la regulación de la prisión preventiva, la Corte sostuvo que “las provincias se hallan sometidas a un piso mínimo determinado por los estándares internacionales a los que se ajusta la legislación nacional, [la cual] (...)receptaría las distintas disposiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos que forma parte de nuestro bloque constitucional federal”.

Para la Corte, la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires en materia excarcelatoria, no se adecua “prima facie” a este estándar. Entonces, “si bien no corresponde un pronunciamiento de esta Corte sobre este tema en la presente causa, tampoco el Tribunal puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y, por consiguiente, cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales que, a modo de ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación”.

Agregó que en materia penitenciaria, la legislación nacional vigente (Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad 24.660) es “una clara norma marco que es constitucional pues no impide ni avanza sobre las legislaciones de ejecución penal provinciales, sino que establece su adecuación, debiendo interpretarse que establece un marco mínimo de régimen, más allá del cual pueden avanzar las provincias en sus respectivas legislaciones”.

Las disidencias parciales de los ministros Carmen Argibay y Carlos Fayt

La Ministra Carmen Argibay coincidió con los fundamentos del voto mayoritario pero se opuso a considerar a la legislación procesal nacional como un marco mínimo al que deben adecuarse las legislaciones provinciales. Para su criterio, “el examen de constitucionalidad del régimen de la prisión preventiva y la excarcelación vigente en la provincia de Buenos Aires debe llevarse a cabo exclusivamente sobre la base de las reglas contenidas en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales que vinculan a las legislaturas provinciales”.

Para Argibay, lo que propone la mayoría en este punto *“importa una severa restricción del principio federal adoptado por nuestro país en el artículo 1º de la Constitución Nacional, pues, fuera del respeto a la Constitución y leyes federales, las provincias no pueden ser obligadas a seguir los criterios legislativos del Congreso Nacional en un tema que no ha sido delegado por las provincias, como lo es, la regulación de la excarcelación y la prisión preventiva. Tanto menos cuando el Congreso al dictar Código Procesal Penal no lo hizo con la expresa declaración o voluntad de que se utilizase como marco obligatorio para la legislación procesal provincial”*.

Por su parte el ministro Carlos Fayt, si bien coincidió en la necesidad de admitir en este caso la posibilidad de interponer un habeas corpus colectivo, entendió que la Corte no podía sustituir a los tribunales provinciales en el examen y la decisión de aquellas cuestiones sobre las que estos todavía no se habían pronunciado. Por ello, la Corte sólo puede disponer que se dé curso al habeas corpus colectivo en la instancia de origen. En tal sentido, sostuvo que “[l]a jurisdicción que a esta Corte le otorga la segunda parte del art. 16 de la ley 48 regula —como es evidente— el ejercicio de un supuesto de su competencia apelada. No es posible por esta vía asumir el conocimiento originario en una causa que como la presente aun no fue sustanciada, pues ello importaría violación de la previsión del art. 117 de la Constitución Nacional”.

El voto en disidencia del ministro Antonio Boggiano

Según el ministro Antonio Boggiano, el planteo del CELS debía ser desestimado pues constituía “una impugnación genérica al sistema carcelario provincial”. Sostuvo que en este caso correspondía ceñirse a una arraigada jurisprudencia de la Corte “según la cual no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos”.

Señaló que existían sustanciales diferencias entre este caso y otros precedentes de la Corte relativos a las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad⁹, “pues allí se perseguía una reparación susceptible de obtenerse mediante un pronunciamiento judicial (...) En

⁹ Fallos: 318:1894 “Dessy”, 325:524 “Mignone” y la causa R.230.XXXIV “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución penal”.

cambio, aquí se persigue la modificación de un sistema carcelario en el ámbito de una provincia, lo cual excede las facultades jurisdiccionales de esta Corte”. Agregó que no le correspondía a la Corte diseñar una política carcelaria provincial y reglamentar su ejecución en todo o en parte, pues ello implicaría menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones.

Sin perjuicio de esto y dada la gravedad de la situación denunciada, Boggiano sostuvo que debía “urgirse a los poderes de la Provincia de Buenos Aires, para que adopten las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos (arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)”.

Síntesis de las medidas resueltas por la Corte en su fallo

1. Reconoce la legitimación del CELS para interponer un *habeas corpus* en defensa de derechos colectivos, basándose en el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional.
2. Declara que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.
3. Dispone que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de personas menores de edad o enfermas.
4. Instruye a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de la Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que ocasione un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal.
5. Ordena al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que, por intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos, en el término de treinta días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple cada detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Asimismo, ordena informar en el plazo de cinco días toda modificación relevante de la situación oportunamente comunicada.
6. Dispone que cada sesenta días el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informe a la Corte las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia.
7. Exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.
8. Encomienda al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que, a través de su ministerio de Justicia, convoque a una mesa de diálogo a la que invitará al CELS y demás organizaciones presentadas como *amicus curiae*, y a otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a la Corte cada sesenta días de los avances logrados.

Cronología del *Habeas Corpus* colectivo

Noviembre de 2001	El CELS presenta una acción de <i>habeas corpus</i> colectivo ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia.
Diciembre de 2001	Los jueces Ricardo Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires rechazan la acción colectiva.
Febrero de 2002	El CELS impugna el fallo del Tribunal de Casación.
Marzo de 2002	La Suprema Corte provincial declara inadmisibile el <i>habeas corpus</i> .
Abril de 2002	El CELS solicita a la Corte provincial la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mayo de 2002	La Suprema Corte provincial rechaza el recurso extraordinario federal.
Junio de 2002	El CELS se presenta directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Febrero de 2004	La Procuración General de la Nación emite un dictamen avalando la acción colectiva.
Agosto de 2004	La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Human Rights Watch y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), se presentan como <i>amicus curiae</i> ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Noviembre de 2004	La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Clínica Jurídica de Interés Público (Córdoba), la Asociación Civil El Ágora, la Asociación Civil Casa del Liberado (Córdoba), la Asociación Civil Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal) se presentan como <i>amicus curiae</i> ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Octubre de 2004	La Corte Suprema convoca a una audiencia pública entre el CELS y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril de 2005	La Corte Suprema convoca a una segunda pública entre el CELS y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Mayo de 2005	La Corte Suprema de Justicia hace lugar al <i>habeas corpus</i> colectivo interpuesto por el CELS y establece estándares mínimos sobre condiciones de detención y prisión preventiva.